Manifiesto de Sanitari@s por la Paz

El contexto general en estos momentos es de un mundo, y especialmente de la Unión Europea, que se rearma y donde resuenan tambores de guerra. Desde Polonia hasta España, Alemania, Suecia o Bélgica, las autoridades están lanzando mensajes de alarma sobre que las amenazas de guerra pueden estar a la vuelta de la esquina.

El año pasado, los miembros de la OTAN **incrementaron** el presupuesto de las partidas para armamento en un **11%**. Este 2024, 18 de sus 31 países alcanzarán el objetivo del 2% de PIB en dichas partidas. Pedro Sánchez se comprometió, tras la Cumbre de la OTAN en Madrid en junio de 2022, a alcanzar este objetivo previsto para 2029, pero la realidad es que el gasto militar ya supera sobradamente el tan manido 2% del PIB.

El gasto militar de los tres últimos presupuestos de España, derivado de la potenciación de la participación en la OTAN y su implicación en la guerra de Ucrania, lleva a la conclusión de que el Estado español seguirá destinando a gasto militar una cantidad escandalosa cuya finalidad es más escandalosa todavía, distribuida (y escondida) en los PGE y que aparece dispersa en distintos ministerios, así como en el sobregasto extrapresupuestario del fondo de contingencia y en los créditos extraordinarios.

Todo ello contrasta con el hecho de que la inversión sanitaria y en salud pública no levanta cabeza. Cuando empezó a verse la luz al final del túnel después de la pandemia, todo eran promesas y buenos propósitos para la Sanidad Pública, que se concretaron en el Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que recogía numerosas, y en general positivas, propuestas para reforzar el sistema sanitario público.

No obstante, ya desde 2021 se pudo ver que la realidad iba por otro camino, y que las actuaciones prácticas de los Gobiernos Central y Autonómicos no respondían con hechos concretos a este supuesto interés por reforzar la Sanidad Pública, lo que pudo comprobarse, por ejemplo, en el bajo porcentaje de fondos provenientes del Plan de Resiliencia que se dedicaba a la Sanidad, y los escasos, hasta la fecha, incrementos presupuestarios de las CCAA y del Gobierno Central, mejoras muy modestas que en modo alguno abordaban las necesidades de atención sanitaria de la población.

Esta insuficiencia presupuestaria explica en gran parte el conjunto de problemas del sistema sanitario, con un deterioro continuado y cada vez mayor de la Atención Primaria, Hospitales públicos con pocas camas y recursos infrautilizados con un aumento de la privatización del sistema sanitario, lo que aumenta los costes de la atención sanitaria y detrae más fondos a los centros de gestión pública, junto con un gasto farmacéutico muy elevado.

Tampoco se han resuelto las necesidades de personal de los centros sanitarios, con una política de Recursos Humanos que penaliza a los profesionales y que ha hecho de las bajas retribuciones y la precariedad su característica fundamental. Todos estos hechos nos llevan a una situación muy preocupante para la Sanidad Pública y a la búsqueda de una parte de la población, la que económicamente puede permitírselo, de alternativas en el sector privado a la desatención de sus problemas de salud, lo que fomenta la inequidad y la quiebra del derecho constitucional a la protección de la salud.

Ante todo lo anterior, más allá de promesas vanas, debemos exigir un compromiso tangible de las administraciones públicas a nivel central y autonómico para garantizar la atención necesaria para toda la población, y para ello es necesario continuar la presión de la sociedad y del personal sanitario, uniendo además la reclamación de otra política que tenga como objetivo más inversiones sanitarias y sociales, menos gastos militares.

En la actualidad, son múltiples los conflictos bélicos en desarrollo en el mundo. El mas sangrante es el de Palestina donde el mundo contempla horrorizado a la vez que impasible el genocidio del pueblo palestino, ordenado por el gobierno de Netanyahu en el que han perecido de manera violenta más de 33.000 personas de las que más de 15.000 son menores de edad que, junto a otras confrontaciones bélicas en Ucrania, Armenia y Azerbaiyán, Yemen, Etiopía, República Democrática del Congo, Siria, países del Sahel, Sáhara y Haití, configuran múltiples contiendas bélicas que amenazan con convertirse en la Tercera Guerra Mundial, con posible empleo de armamento nuclear, en la que millones y millones de seres humanos morirían de manera cruenta.

En el Estado español, sin duda, debemos movilizarnos para que el Gobierno abandone la vía militar optando por la vía del diálogo, la negociación y la paz. Debemos abogar por construir un movimiento de amplia base, lo más transversal posible en favor de la paz, frente a todas las guerras y sus consecuencias que se vienen sintiendo con toda crudeza en el Estado español y en todos los países del mundo, entre otras, inflación galopante, incremento del paro, pérdida de poder adquisitivo, presupuestos de guerra, deterioro significativo de la sanidad, la educación y del resto de los servicios públicos, subidas de las hipotecas, mayor número de desahucios, graves daños en el medio ambiente, movimientos migratorios incontrolados, supresión de derechos y libertades democráticas y auge del fascismo.